



## Observatorio sobre políticas públicas y reforma estructural

### Informe N° 3

#### Resistencias de la sociedad civil al reformismo estructural de Cambiemos

*Agustina Gradin*

#### **Introducción**

Durante los dos primeros años de gestión, se podría decir que el Macrismo fue exitoso en desarticular las resistencias de la sociedad civil, aún en un contexto de alta movilización. Desde su asunción en diciembre de 2015, fue sustantivo el aumento de las acciones colectivas de protesta. Durante el 2016 se sucedieron un total de 6419 hechos de protestas, y hasta noviembre de 2017, un total de 4728 acciones colectivas<sup>1</sup>.

Estas acciones fueron vinculadas principalmente a reclamos sindicales (protestas por despidos, acuerdos salariales o leyes laborales como la ART o la reforma actual), así como a hechos protagonizados por el movimiento de mujeres (los paros de mujeres y las marchas de #niunamenos), organizaciones sociales y del mundo de la economía popular (las ollas populares por la ley de emergencia alimentaria o los reclamos por la implementación de la ley de emergencia social de 2016), los derechos humanos y a la memoria histórica (la marcha contra el 2 x1, el 24 de marzo o las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado, entre otras).



---

<sup>1</sup> Fuente: Informes mensuales, Consultora Diagnóstico Político.

Aun así, en un contexto de alta conflictividad, las protestas sociales, que durante los gobiernos kirchneristas fueron articuladas a través del Estado y sus políticas públicas, pusieron en debate a los principales actores de estos procesos, sus formas de representación y articulación de demandas, sus liderazgos colectivos o individuales, y la forma en que el sistema político en su conjunto las canalizaba. Las respuestas gubernamentales tuvieron más que ver con deslegitimar los conflictos con argumentos neoliberales como la “politización del conflicto” (desconociendo la politicidad inherente a todo conflicto social) y su “utilización” por parte de sectores opositores. A la vez, aceitó la respuesta represiva, a través de diferentes dispositivos que fueron desde la persecución y el encarcelamiento de manifestantes y dirigentes sociales, el desprestigio público de referentes sindicales, sociales y políticos opositores, el intento de regulación de las protestas con el protocolo, y hasta la represión directa durante las movilizaciones.

El gobierno nacional optó por la desarticulación de las demandas, sectorializando los reclamos, y la desmovilización social a partir de la represión de las protestas y sus protagonistas. Fue exitoso cuestionando la legitimidad de los liderazgos políticos y sociales de la etapa anterior. Asimismo “gestionó” las demandas, pero no abordó políticamente el conflicto. Es decir, no articuló políticamente con los actores colectivamente movilizados (no se convocó nunca a mesas diálogo), sino que negoció respuestas individualizadas a cada reclamo desde una mirada técnica del mismo. Este es el estilo de gestión de los conflictos sociales (junto con la opción represiva que parecía inconducente, pero que ha regresado) que el gobierno actual está instalando como forma de canalización de las demandas sociales. Sobre esta forma de articular la relación con la sociedad hay que poner el foco de atención. Y en definitiva, a partir de la despolitización de este conflicto particular, el gobierno está intentado pilotearlo sin dar el debate de fondo: ¿sobre qué sector social descansa el ajuste?

### **El nuevo ciclo de resistencias**

La victoria oficialista de octubre de 2017 hizo creer al gobierno que estaban las condiciones para profundizar las reformas estructurales impulsadas por los sectores de poder del neoliberalismo tardío (García Delgado y Gradín, 2017). Sin embargo, estas se toparon con la resistencia popular evidenciando el descontento social frente a estas medidas, encarnada en diferentes actores que constituyen sujetos políticos fragmentados y desarticulados, verticalmente con el sistema político, y horizontalmente entre sí. Su capacidad de movilización, pero también de articulación y representación política, son la clave para pensar el nuevo ciclo de protestas abiertas a partir de la sanción de la ley de reforma previsional.

Los conflictos ya anunciados en torno a los despidos masivos en el Estado, las negociaciones paritarias en el sector privado de la economía, los recortes en los programas sociales, la des – financiación de la educación y la salud, los aumentos de tarifas y por lo tanto de la inflación, entre otros, hacen prever un principio de 2018 muy intenso. Sin embargo, la capacidad de convertir este descontento en potencia política, está en las propias organizaciones que protagonizarán estas resistencias. Como ya se discutió mucho, la determinación del voto por la economía no es tal. El Macrismo demostró su capacidad de desacoplar la situación económica del escenario político. En este sentido, la intermediación política y social es necesaria para convertir una demanda o interés particular en un bien común (y en esto el gobierno ha sido muy eficiente, desacoplando la cuestión política de lo económico). La capacidad de representar y articular demandas sociales, amplias y sectoriales, con proyectos políticos transformadores, es la piedra angular de una nueva construcción política de nuestro país.

Y aquí podemos señalar los hechos de protesta de diciembre de 2017 como una bisagra en la relación entre el gobierno nacional y el conflicto social. Los acontecimientos de diciembre de 2017, la resistencia popular a la ley de reforma previsional, la caída del nivel de aprobación del gobierno en la opinión pública<sup>2</sup> y los virajes en la estrategias de gobierno para con la reforma laboral y la reforma del Estado<sup>3</sup>, muestran que se abrió un nuevo escenario para el Macrismo y para la resistencia. La estrategia de impulsar el “reformismo permanente” generó un efecto articulador de las resistencias sociales que se venían expresando descoordinadamente en el espacio público. Al decir de Giddens, estas fueron consecuencia no deseada, pero calculada de la acción.

Las medidas impulsadas con posterioridad a la victoria oficialista de las elecciones legislativas de 2017, reabrieron un escenario de crecimiento del conflicto y la protesta social sobre el fin del año, con una masiva expresión en el espacio público de las demandas de diferentes sectores sociales perjudicados. Este escenario, pareciera, continúa abierto y se profundizará en la medida que avanza el 2018, ya que se prevén varios frentes de resistencia y conflicto social, aún latentes. Las movilizaciones de diciembre del 17 contra la reforma previsional y la actual convocatoria del “21 F” del sindicalismo, pero acompañada por los movimientos sociales y partidos políticos opositores, son botón de muestra de la potencia de la protesta en las calles. Pero también abren un nuevo escenario de coordinación opositora en el Congreso, y en la opinión pública expresada en las redes sociales y medios de comunicación alternativos.

---

<sup>2</sup> [https://www.clarin.com/politica/cae-imagen-gestion-macri-caso-triaca-aumentos-tarifas\\_0\\_H1TydsXlf.html](https://www.clarin.com/politica/cae-imagen-gestion-macri-caso-triaca-aumentos-tarifas_0_H1TydsXlf.html)

<sup>3</sup> <http://www.ambito.com/911570-macri-firmo-mas-de-la-mitad-de-sus-dnu-con-el-congreso-cerrado>

Como señalábamos en otro artículo ([García Delgado y Gradin, 2017](#)), el neoliberalismo tardío se apoya en la desestructuración del “pueblo” como referente colectivo, promoviendo el individualismo como cultura política (“vos: vecino y/o ciudadano”) y la sectorialización de las demandas sociales como estrategia de intervención estatal (los problemas son técnicos, nunca políticos). Sin embargo es evidente que la “herencia recibida” incluía una sociedad con conciencia de derechos y con niveles altos de politización, así como una trayectoria de organización y movilización de nuevos y viejos actores sociales, sindicales y políticos. El nuevo contexto político permite visualizar un horizonte alentador a las resistencias, generando un efecto articulador de las demandas y protestas. Este se inscribe en un escenario global y local que muestra un gobierno con ciertos problemas para mostrar resultados de sus políticas.

En el plano global, el fracaso de la Cumbre de la OMC en diciembre de 2017, y particularmente del acuerdo Mercosur - Unión Europea puesto en entredicho nuevamente con la visita del Presidente Macri a Francia en enero de 2018, y los sucesivos reveces comerciales con EEUU por productos primarios y agroindustriales (limones y biodisel), condiciona la posibilidad de mostrar un gobierno con proyección internacional. En el plano local, caída la inserción internacional como motor del desarrollo macrista, la sequía reducida y acotada llegada de inversiones privadas, el aumento sostenido de la deuda externa, la persistencia de los niveles inflación, la contracción del consumo y de la actividad productiva, así como los aumentos de los índices de desocupación, pobreza e indigencia construyen un escenario, que aún con el espaldarazo político innegable que significó la victoria oficialista en las elecciones legislativas de octubre, es caldo de cultivo para el aumento de la conflictividad social.

En este marco identificábamos cuatro espacios de demandas que consideramos, serán temas de debates en esta coyuntura. En primer lugar, las demandas vinculadas al mundo del trabajo formal orientadas a defender el nivel y el poder de compra de los salarios, los derechos laborales y sus estándares de vida. Paralelamente, las demandas vinculadas a la economía informal y los sectores populares, que abogan por “auto incluirse” en el modelo. En tercer lugar, las demandas vinculadas a los derechos humanos que incluyen a demandas sectoriales y transversales como las del movimiento de mujeres, los pueblos originarios, la tenencia de la tierra y los movimientos ambientalistas, los organismos de derechos humanos, entre otros. Y por último, no menor, las demandas vinculadas a la reforma del Estado, ya sea en término de empleo público como de desinversión en áreas estratégicas como educación y salud, entre otras. Los hechos de protestas y conflictos generados a partir de la Ley de reforma previsional en diciembre del 2017 han mostrado un punto de quiebre en cuanto a la relación entre el gobierno y el conflicto social.



### Actores y resistencias

Más allá de la descripción de los posibles puntos de conflicto generados por el neoliberalismo tardío que ya han sido abordadas en otros informes de este observatorio<sup>4</sup>, la cuestión de fondo sigue siendo la pregunta sobre el sujeto político que logrará encarnar la oposición al modelo socioeconómico de Cambiemos. Es claro que el actor sindical es el que tiene mayor capacidad de resistencia, aún en un escenario con grandes diferencias a su interior. Es este actor el que, quizás, tenga mayor capacidad de penetración en las clases medias asalariadas, base social de Macrismo, que como [señalan varios análisis](#), comienza a ver derrumbarse el sueño de un futuro económico mejor. El triunvirato de la CGT, y su ambivalente estrategia de negociación, se han encontrado con fuertes limitaciones para contener el descontento de sus bases. De las diferentes acciones de protesta que han realizado desde que asumió Mauricio Macri, podemos decir que la movilización ha desbordado a su propia conducción<sup>5</sup>. La incapacidad de canalizar y contener el descontento social de la clase trabajadora tuvo como resultado el aumento del protagonismo del sindicalismo de izquierda por un lado, con fuerte presencia en el conflicto social y con vínculos estrechos con el ámbito legislativo. Este elemento, no menor, es un aspecto distintivo de esta etapa. Por otro lado, comienzan a surgir intentos de unidad en la acción entre diferentes sectores sindicales que no acuerdan con la política del oficialismo de la CGT, como la Corriente Federal dirigida por el referente del gremio de los bancarios, o la línea dura de la UOM encarnada en el histórico Barba Gutiérrez, entre otros. Estos sectores han decidido dar la batalla contra las políticas de ajuste desde una estrategia amplia de coordinación en la acción con los otros actores principales del conflicto social.

---

<sup>4</sup> Ver [Informe N° 1](#) e [Informe N° 2](#) del Observatorio en Políticas Públicas y reforma estructural de FLACSO.

<sup>5</sup> Pensamos en la marcha de abril de 2016 por la doble indemnización, o la movilización de marzo de 2017 donde se ultrajó el atril del escenario, entre otras.

Las dos CTA, partidas durante el gobierno kirchnerista, encuentran en el actual escenario un contexto ideal para la coordinación de estrategias de lucha, reconstruyendo un entramado de alianzas fundamentales para pensar el sujeto colectivo. El capital político y organizativo, que dejó la herencia recibida, vuelve a ponerse en juego en dos demandas específicas. Por un lado, en la lucha por las condiciones de trabajo de su base social, principalmente vinculada al empleo público. Y por otro lado, en la defensa del rol del Estado en un modelo de desarrollo con inclusión social. Por estas dos cuestiones, la CTA es uno de los actores claves del proceso de resistencia. A su vez, su capacidad de organizar y movilizar a un sector medio de la población (maestrxs, médicxs, científicxs, artistas, jubiladxs y empleadxs públicos en general) le permiten también mayor nivel de representación de los desilusionados por las falsas promesas de campaña.

Es de prever que en la medida que avance el proceso de modernización de ruptura del Estado, ambas CTA asuman roles más protagónicos y combativos en el conflicto. La ofensiva contra el gremio docente a partir de la anulación de la Paritaria Nacional Docente y el constante ataque y desprestigio de sus dirigentes y de su tarea son parte de una estrategia gubernamental que combina la persecución judicial sobre los dirigentes y un desprestigio constante hacia la organización sindical como forma de transformación y de defensa de derechos, clásicas de la derecha conservadora. Desde un paradigma basado en la transparencia y en las virtudes del progreso individual por sobre el colectivo, se construye una fuerte ofensiva contra todo el movimiento obrero organizado que busca socavar su legitimidad en la sociedad para debilitar su posición dentro de la disputa capital – trabajo, último objetivo y el fundamental, que explica la necesidad de aprobar la reforma laboral y de moderar las negociaciones paritarias.

El crecimiento de la izquierda roja (en sus diferentes y variadas expresiones) dentro del sindicalismo es un factor importante del conflicto social e interpela, claramente, a las representaciones obreras y sus formas de hacer política hacia adentro de los sindicatos, como para con sus estrategias de negociación con el gobierno y las patronales. Con una agenda de reclamos, demandas y conflictos, más amplia que el sindicalismo tradicional, esta corriente tiene fue aumentando su protagonismo y su capacidad de instalar en el espacio público su propia voz.

Otro actor fundamental de este proceso de resistencia es claramente los movimientos sociales vinculados a la economía popular. Como ya señalamos en [otro artículo \(Gradin, 2017\)](#), este nuevo actor social, como etapa superior de las organizaciones de desocupados, se encuentra compuesto por una cantidad considerable de organizaciones sociopolíticas heterogéneas y con distintas trayectorias sociales y partidarias. Sin embargo, podríamos decir que es un espacio que se fue organizando y

consolidando desde fines del 2011 de la mano de un proceso económico que no despuntaba en la creación de empleo formal, y que encontró en la economía popular una estrategia de supervivencia. El proceso político que se abrió desde su irrupción pública en agosto de 2016, el movimiento de la economía popular ha crecido en su capacidad de construcción comunitaria vinculada a su desarrollo territorial y a su capacidad de representación, tejiendo alianzas sociales y políticas con otros actores del mundo sindical, del estatal y del religioso, así como con un amplio espectro de organizaciones político – partidarias. Esto lo ubica en un lugar destacado del universo de la resistencia, justamente en representación de los sectores populares más golpeados por el tardo neoliberalismo.

Hasta acá, sindicatos y sectores populares, pueden ser pensados como los clásicos sujetos colectivos de transformación identificados con la lucha contra el ajuste económico propuesto por el neoliberalismo. Su unidad en la acción, con sus vaivenes y contradicciones, pareciera ser un elemento esperanzador de las resistencias sociales. Sin embargo, su incapacidad de traducir esa unidad en una herramienta política electoral (obviamente por factores mucho más complejos del sistema político argentino), es el primer gran límite con que choca la resistencia, y del cual se nutre el actual gobierno para continuar sosteniendo la ofensiva, ya sea de forma precaria. Ahora bien, hay otros actores sociales que también fueron y son protagonistas de las resistencias (que son muchas y disímiles), y que merecen nuestra atención por su capacidad de socavar de forma amplia las bases sociales de actual proyecto de derecha. Estas son el movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos (también en sentido amplio, las vinculadas a los delitos de *lesa* humanidad de la última dictadura militar, pero también aquellos vinculados a la lucha contra el gatillo fácil, la violencia institucional, etc.).



Estos dos espacios tienen la particularidad de convocar, interpelar y representar a un entramado poli clasista de subjetividades. Es decir, de unificar a través de sus demandas a diferentes clases sociales, pero también diferentes anclajes profesionales,

laborales, culturales, sectoriales, etc. Sus demandas son transversales a diferentes colectivos sociales, lo cual les otorga una potencia diferente a su capacidad de mellar el consenso y apoyo oficialista. Sin embargo, por su propia característica organizativa (redes horizontales sin interlocutores claros) se hace complicada la posibilidad de traducir esa potencia en un armado político electoral competitivo. Es más su capacidad de daño político que de construcción de alternativas dentro del sistema electoral. En el último tiempo, como frentes de masas, se han constituido en espacios fundamentales para el crecimiento de organizaciones populares, donde todos los partidos políticos quieren estar. En general sus acciones de protestas y sus movilizaciones son acompañadas por una buena parte de la sociedad no organizada, un espacio amplio de apoyo a sus causas, que son caldo de cultivo y de disputa de la construcción organizacional del espacio progresista. Buen parte de este espacio, no orgánico y referenciado quizás con estructuras intermedias de la sociedad como organizaciones barriales, centros de estudiantes, etc., fueron los protagonistas de “los cacerolazos” que acompañaron las masivas movilizaciones en contra de la ley de previsión social, expresando a su vez el descontento generalizado con la situación socioeconómica general.

### **Reflexiones finales: articulaciones en el desierto**

La potencia política de las movilizaciones populares que resistieron desde diferentes espacios, momentos y formatos, la aprobación de dicha ley, reside a nuestro entender en dos lugares fundamentales del juego político. En primer lugar, en su impacto en la opinión pública hasta ese momento favorable al Macrismo. La capacidad de las imágenes de resistencia de mellar el cerco mediático y el apoyo oficialista a la medida, permitió visualizar en el debate público la importancia y las consecuencias de dicha política. Por su masividad y combatividad, y por la respuesta brutal por parte del Estado a partir de la represión desatada, fueron un *deja vú*, al que la sociedad no ignoró. A su vez, el sentido de solidaridad generacional es parte del ADN argentino, aún en época de individualismo extremo. Este factor fue el sustrato de legitimidad del reclamo que atravesó todos los acontecimientos. Por otro lado, además del espacio fundamental de la calle y en la opinión pública, estos acontecimientos impactaron en el escenario legislativo materializando una estrategia colaborativa entre los diferentes actores, que si bien ya había sucedido durante la sanción de la Ley de Emergencia Social en diciembre de 2016, esta vez tuvo niveles de coordinación política muy interesantes. Esto, si bien no es garantía de unidad electoral, si permite pensar que la disputa legislativa contra los principales resortes de la estrategia de reforma estructural, sea un punto de articulación política de la resistencia al tardo neoliberalismo en nuestro país.



En los próximos acontecimientos como el paro de estatales el 15 de febrero, la movilización del 21 de febrero, el paro internacional de mujeres del 8 de marzo, y en diferentes los conflictos sindicales por despidos o por paritarias a la baja, vamos a visualizar la potencia política de las resistencias sociales al neoliberalismo tardío. El gobierno ya comenzó con una ofensiva fuerte de deslegitimación de la protesta, subestimando el descontento social transversal a los sectores populares y las clases medias, y esgrimiendo argumentos basados en la criminalización de la protesta y de sus principales referentes. Aunque la dirigencia sindical merece muchas críticas fundamentadas, es una estrategia políticamente vil pretender asociar la protesta social a la defensa de sus líderes, destruyendo además el entramado organizaciones fundamental y necesarias para cualquier país, que son sus organizaciones sociales, políticas y sindicales. La capacidad de articulación política - electoral, amplia y progresista, de las resistencias es obviamente una deuda pendiente de la nueva etapa abierta, donde los diferentes actores señalados tienen un rol fundamental en la construcción de una alternativa al actual modelo tardo neoliberal.

**Febrero de 2018**